



# LA REPRESIÓN POLÍTICA EN SUDÁFRICA: UNA “POLÍTICA DE SANGRE”



Dossier n°31  
Instituto Tricontinental de Investigación Social  
Agosto 2020

**FOTO DE TAPA**

Una activista de la Campaña contra Desalojos, observa el lugar de construcción del campamento de tránsito de Delft, una "zona de reubicación temporal" para personas desalojadas de barracas más cerca de la ciudad. Marzo 2009.

Kerry Ryan Chance

# LA REPRESIÓN POLÍTICA EN SUDÁFRICA: UNA “POLÍTICA DE SANGRE”



Dossier nº 31 | Instituto Tricontinental de Investigación Social  
Agosto 2020

En su famoso discurso desde el banquillo de los acusados en abril de 1964, Nelson Mandela habló de “democracia revolucionaria”, basada en formas precoloniales de deliberación y decisión colectiva. En un discurso pronunciado en abril de 1982, Joe Foster, entonces Secretario General de la Federación de Sindicatos Sudafricanos (FOSATU<sup>1</sup>), enfatizó la necesidad de que lxs trabajadorxs “construyan su propia organización poderosa y eficaz”, aliada pero independiente del movimiento de liberación nacional dominado por la élite, y de que construyan prácticas y organización democrática desde las bases con el objetivo de lograr “una mayor participación y control de lxs trabajadorxs sobre la producción”. En mayo de 1987, Murphy Morobe, un líder del Frente Democrático Unido (UDF), argumentó que “al desarrollar organizaciones de masas activas y prácticas democráticas dentro de estas organizaciones, estamos sentando las bases para una futura Sudáfrica democrática”.

Sin embargo, durante la transición del apartheid, la concepción dominante de democracia entre las élites siguió los arreglos generales hechos al final de la Guerra Fría. Una lucha librada por millones por la construcción de poder popular democrático y formas participativas de democracia fue reducida a elecciones, tribunales, prensa comercial libre y se sustituyeron formas democráticas de organización popular por las ONG, ahora denominadas “sociedad civil”.

De forma muy parecida a la situación tan bien descrita por Peter Hallward en *Damming the Flood: Haiti, Aristide and the Politics of Containment* [Represando la inundación: Haití, Aristide y la política

<sup>1</sup> Todas las siglas están en inglés por tratarse de nombres propios sin traducción oficial.

de contención, en traducción libre] —un recuento del golpe de 2004 en Haití—, la política vino a ser entendida sobre todo como una disputa dentro de las élites. Varias facciones de la élite hablan en nombre de los sectores más oprimidos de la sociedad a través de una forma de paternalismo, profundamente impregnada de las ideas coloniales sobre las capacidades políticas de las personas negras empobrecidas.

El 18 de diciembre de 1996, Mandela promulgó una nueva Constitución, que consagró una versión amplia del conjunto estándar de derechos liberales, incluyendo una serie de derechos que protegen la libre actividad política. La mayoría de la clase media sudafricana, incluidos sus intelectuales profesionales, asumió que la nueva Constitución significaba que el país había trascendido mágicamente no solo el autoritarismo colonial del pasado y el contra-autoritarismo rampante en el partido Congreso Nacional Africano (ANC) en el exilio, sino la militarización de la política popular en algunas partes del país durante los últimos años del apartheid y durante la transición.

Para cuando se promulgó la nueva Constitución, las formas populares democráticas de política que se habían desarrollado en el movimiento sindical luego de las huelgas de Durban de 1973, y en las luchas comunitarias que estaban vinculadas a ellas bajo la bandera del UDF desde 1983, habían sido, según el caso, desmovilizadas, colocadas bajo la autoridad del nuevo partido gobernante o sustituidas por un conjunto de ONG.

Las formas independientes de autoorganización y las demandas populares de formas más participativas de democracia fueron frecuentemente tratadas como delitos, como complotos de potencias extranjeras o como maquinaciones de los remanentes de las fuerzas de inteligencia del apartheid intentando restaurarlo. Frantz Fanon advirtió en 1961 de la “incapacidad de la clase media nacional para racionalizar la acción popular, es decir, su incapacidad para ver las razones para esa acción”. Esta advertencia resultaría demasiado profética en la Sudáfrica postapartheid.

Durante aproximadamente la primera década del nuevo orden, la represión estatal a menudo no fue reconocida en la esfera pública burguesa. Los relatos de la represión de los activistas de base fueron en gran medida ignorados, desacreditados o presentados como consecuencia de una atribuida ignorancia sobre el funcionamiento de la nueva democracia. Cuando se reconocía la represión, generalmente fue considerada como una resaca del pasado del apartheid, que pronto se resolvería gracias a los poderes mágicos de la nueva Constitución.

Esto comenzó a cambiar el 13 de abril de 2011 cuando Andries Tatane, un maestro de escuela y activista comunitario, fue asesinado a tiros por la policía durante una protesta contra el abandono social general y, en particular, la falta de suministro de agua por parte del Estado a muchos de los residentes de la pequeña ciudad rural de Ficksburg. Tatane estaba desarmado y la multitud de 4.000 personas que lideraba era pacífica. Su asesinato fue filmado y transmitido por las noticias de la televisión. Al menos 25 personas, y muy probablemente más, habían sido asesinadas en protestas antes que Tatane y

al menos 12 activistas habían sido asesinados. Sin embargo, el hecho de que el asesinato de Tatane fuera filmado y transmitido en la televisión nacional comenzó a generar cierta comprensión de la realidad de que la represión era, de hecho, un rasgo constitutivo del nuevo orden.

La masacre estatal de 34 mineros en huelga en Marikana, un pueblo minero de platino, el 16 de agosto de 2012, dejó al desnudo el lado autoritario del nuevo orden para que todos lo vieran. Los boletines de noticias televisivas en todo el mundo transmitieron imágenes de la masacre tomadas desde atrás de una de las líneas de la policía. Esas imágenes mostraban a los mineros agazapados, con armas rudimentarias, corriendo hacia una línea de policías. No mostraban que los mineros corrían porque estaban siendo atacados por la retaguardia por otra línea de policías, vehículos blindados incluidos.

Las respuestas iniciales a la masacre en la esfera pública burguesa tomaron la forma de una orgía de estereotipos coloniales sobre los mineros en huelga, incluyendo declaraciones de irracionalidad, superstición, intentos de presentar a los huelguistas como sujetos premodernos no aptos para el mundo moderno y afirmaciones infundadas sobre malévolos “agitadores externos”. Se argumentó repetidamente que la policía había actuado en defensa propia. Los reportajes cuidadosos de Greg Marinovich comenzaron a desmontar el relato policial sobre la masacre, que al comienzo había sido repetido acríticamente por buena parte de los medios de comunicación. Después, más reportajes y trabajos académicos comenzaron a penetrar en las razones de la huelga, las largas tradiciones políticas

en las que se basaban los mineros y las formas de organización que habían utilizado.

En términos de represión estatal, Marikana sigue siendo la mancha más sangrienta en el acomodo entre el capital y los intereses de la burguesía nacional que ha dado forma al orden posapartheid. Pero Marikana no llegó como un ladrón en medio de la noche.







Policía hace barricada en la entrada de la Alcaldía durante una marcha de miles de miembros de Abahlali baseMjondolo contra la represión policial, Durban, 8 de octubre de 2018.

Madelene Cronjé / New Frame

## *Una historia de violencia*

Los últimos años bajo el régimen del apartheid y el período de transición al nuevo orden fueron extremadamente violentos. La rebelión urbana que comenzó con las huelgas de Durban en 1973 y ganó intensidad con el levantamiento de Soweto en 1976, había atraído a millones de protagonistas para los años ochenta y fue objeto de una severa represión.

Desde 1984 hasta 1993, hubo a menudo conflictos violentos entre fuerzas alineadas de modo amplio al partido Congreso Nacional Africano (ANC) y la Organización del Pueblo Azania (AZAPO), una formación de conciencia negra. Entre 1985 y 1995 hubo un conflicto armado sostenido entre Ikhata, una organización nacionalista conservadora zulú, y el UDF y después el ANC también. Se estima que este conflicto, planteado en términos de la Guerra Fría con Inkhata respaldada por el Estado del apartheid y a menudo denominado guerra civil, costó más de 20.000 vidas. La lucha más intensa se dio en lo que en ese entonces eran la provincia de Natal y el bantustán KwaZulu [los bantustanes eran espacios creados siguiendo el modelo estadounidense de reservas indígenas, para la remoción o exclusión de personas africanas de la Sudáfrica blanca]. Pero también había una violencia significativa en y alrededor de Johannesburgo. Uno de los resultados de estos conflictos es que, en lo que en 1994 sería la provincia de KwaZulu-Natal, la política se militarizó significativamente bajo la autoridad de un conjunto de

agentes de poderes locales, algunos de los cuales continuarían siendo influyentes en el nuevo orden.

Esta violencia, aunque ignorada en gran medida por la esfera pública burguesa, nunca paró. Un cuidadoso estudio de 2013 realizado por el investigador David Bruce, contabilizó 450 asesinatos políticos en KwaZulu-Natal desde el fin del apartheid en 1994. La violencia previa a la transición a la democracia burguesa había visto a cientos y, en ocasiones, incluso miles de hombres movilizados en batalla. Después del apartheid, los asesinatos se llevaron a cabo de forma encubierta por asesinos profesionales y estaban cada vez más motivados por acceso a los recursos estatales que por diferencias ideológicas. La mayor parte de estos asesinatos fueron el resultado de competencias por poder y recursos al interior del partido Congreso Nacional Africano (ANC), de Nelson Mandela, el principal partido político sudafricano durante la transición y del que han salido todos los presidentes del país desde el fin del apartheid.



Vendedoras ambulantes en la parada de taxis de Bara en una patrulla conjunta de la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF) y el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) durante el confinamiento por covid-19 en Soweto, Johannesburgo, 1 de junio de 2020.

Michelle Spatari / AFP / Getty Images

## *Los primeros movimientos hacia la organización independiente*

Los campus de las universidades históricamente negras están entre los primeros lugares de oposición popular organizada contra el nuevo Estado. La *Freedom Charter* [Carta de la Libertad], adoptada por el ANC el 26 de junio de 1955, después de un proceso de recoger y unir demandas populares, había declarado que después del apartheid: “La educación será gratuita, obligatoria, universal e igualitaria”. Sin embargo, después de que el apartheid acabó formalmente, el ANC siguió el modelo del Banco Mundial e insistió en que las familias empobrecidas debían pagar pensiones para acceder a la educación universitaria. Cada año, desde el comienzo del período postapartheid, los estudiantes que enfrentaban la exclusión debido a su incapacidad para pagar las pensiones se organizaban para permanecer en las universidades.

Hubo un intento por desmilitarizar la policía después del fin del apartheid, pero esta continuó haciendo un uso sostenido de las tecnologías policiales coloniales, como balas de goma, gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento. Las protestas estudiantiles se enfrentaban habitualmente a la violencia policial. En algunos casos, las universidades también trajeron empresas privadas de seguridad

militarizadas. Cuando los medios de comunicación informaron sobre ello, con frecuencia se tildaba a lxs estudiantes —al estilo colonial clásico— de irracionales, amenazadores y, en última instancia, bárbaros.

El 30 de noviembre de 1998, Simon Nkoli, un militante contra el apartheid que también había sido una figura destacada en el movimiento por la liberación homosexual, murió en Johannesburgo de una enfermedad relacionada al VIH. El 10 de diciembre de ese año, un grupo de activistas en Ciudad del Cabo fundó la Campaña de Acción pro Tratamiento (TAC), en respuesta a la muerte de Nkoli. La TAC hizo campaña, al final exitosamente, para que las personas que viven con VIH y SIDA accedan a medicación a través del sistema público de salud. Como Nkoli, Zackie Achmat, que surgió como la cara pública de la nueva organización, tenía una larga historia tanto en las luchas contra el apartheid, durante las cuales fue repetidamente encarcelado en su adolescencia, como en las luchas por la liberación de los homosexuales.

En 1999, el entonces presidente Thabo Mbeki, en respuesta al racismo que saturaba gran parte del discurso popular y científico en torno al VIH y el SIDA, dio un catastrófico paso en falso y negó la evidencia científica respecto a la etiología y el tratamiento del SIDA. Como resultado, la TAC libró una lucha creciente tanto contra las compañías farmacéuticas como contra el negacionismo de Mbeki.

La TAC se alineó con el ANC y tuvo fuerte apoyo de los sindicatos aliados al partido. Participó exclusivamente en formas de protesta no violentas e hizo un uso efectivo de los tribunales, las protestas

públicas y la esfera pública burguesa, donde tenía poderosos partidarios y era generalmente bien considerada. Aún así, en un preludeo a la paranoia que tendría consecuencias mortales a futuro, dentro del ANC fue considerada como un vehículo de una conspiración extranjera para socavar la autoridad de este partido.

El 16 de mayo de 2000, el estudiante Michael Makhabane fue asesinado a tiros a quemarropa por la policía durante una protesta contra las exclusiones en el campus de lo que era en ese entonces la Universidad de Durban-Westville. La policía y el entonces jefe de la Liga de la Juventud del ANC, Malusi Gigaba, mintieron sobre el asesinato. La policía, recurriendo al miedo muy racializado a los secuestros de automóviles para legitimar el asesinato, afirmó falsamente que Makhabane había intentado secuestrar un auto que pasaba, cuando en realidad él y otros manifestantes estaban desarmados.

En 2000 y 2001 se formaron una serie de organizaciones que se unirían a la TAC para convertirse en la primera generación de movimientos sociales de la Sudáfrica postapartheid. Este fue un período en el que las demandas populares —en especial el fracaso del ANC para abordar la cuestión de la tierra, los desalojos urbanos y las desconexiones de agua y electricidad— comenzaron a expresarse fuera de las estructuras afiliadas al partido gobernante.

En julio de 2000, se creó en Johannesburgo el Foro Anti-Privatización (APF), para oponerse a un movimiento de mercantilización de los servicios públicos por parte del gobierno municipal. El APF reunió a una mezcla de radicales de clase media, estudiantes,





Activistas de la Campaña de Acción Pro Tratamiento (TAC) marchan hacia el parlamento de Gauteng, protestando contra la reelección de Qedani Mahlangu y Brian Hlongwa en un comité provincial del ANC. Ambos políticos se vieron envueltos en un escándalo de salud pública en el que 143 personas murieron por causas que incluían hambre y el abandono, Johannesburgo, 7 de agosto de 2018.

Sandile Ndlovu / Sowetan / Gallo Images



sindicalistas y afiliadxs de base, que creció rápidamente para convertirse en un movimiento vibrante con focos de apoyo esparcidos por todo Johannesburgo.

En noviembre de ese mismo año, activistas de base fundaron en Ciudad del Cabo la Campaña contra los desalojos de Cabo Occidental, usualmente abreviada como Campaña contra los desalojos (AEC), para oponerse a los desalojos y a las desconexiones de electricidad. La AEC —que inspiraría la formación de la Campaña contra los desalojos de Chicago en Estados Unidos— se convirtió en un actor importante en algunas partes de Ciudad del Cabo y participó en formas militantes de acción directa.

En julio de 2001, varias ONG de izquierda encabezaron la formación del Movimiento de los Sin Tierra (LPM) como una red nacional de ONG y grupos de base preocupados por cuestiones relacionadas con la tierra. Al mismo tiempo, se formó el Foro de Ciudadanos Preocupados (CCF) en respuesta a los desalojos y desconexiones en los vecindarios de Bayview y Westcliffé en Chatsworth, una barriada en Durban. Fue liderado por un carismático intelectual de clase media.

En octubre de 2000, el entonces presidente Mbeki le dijo al bloque del ANC en el Parlamento que la CIA era parte de una conspiración para promover la visión de que el VIH causa el SIDA. Esta paranoia se extendería a todos los nuevos movimientos que surgieron fuera del ANC, un número de los cuales consiguieron pruebas sólidas de vigilancia y penetración estatal. La académica Jane Duncan señala que “La intensificación de las actividades de... los agentes [de

inteligencia del Estado] coincidió con el establecimiento de movimientos sociales que luchan por la tierra y contra la mercantilización de los servicios básicos”. Desde este período, ha habido numerosos relatos de personas en organizaciones comunitarias y movimientos sociales a quienes se les han acercado para ofrecerles que proporcionen información o que trabajen para los servicios de inteligencia estatales.

El APF, la AEC y la CCF politizaron con éxito la práctica generalizada de hacer conexiones eléctricas autoorganizadas, y la AEC desarrolló una práctica de montar resistencia directa contra los desalojos y devolver a las personas desalojadas a sus hogares. Estas acciones fueron vistas como confrontaciones por el Estado y gran parte de la esfera pública burguesa, y a menudo se las presentó en términos criminales. A pesar de sus vínculos con el ANC, de evitar tácticas de confrontación y del apoyo que tenían de figuras públicas poderosas, como el arzobispo Desmond Tutu, la TAC se volvió blanco de la violencia policial. El 20 de marzo de 2011, sus miembros fueron gravemente agredidos por la policía en Durban, lo que causó la hospitalización de cinco manifestantes.

Las detenciones por cargos que no podían sostenerse en un juicio, pero que requerían múltiples comparecencias ante los tribunales antes de que se retiraran los cargos o el caso fuera a juicio, se convirtieron en una experiencia rutinaria para los activistas. Por ejemplo, el 6 de abril de 2002, un guardaespaldas del entonces alcalde de Johannesburgo, Amos Masondo, disparó contra una protesta organizada por el APF contra las desconexiones de agua y electricidad, hiriendo a dos personas. Los manifestantes intentaron defenderse con piedras y 87 fueron

arrestadxs y se les hizo comparecer ante los tribunales varias veces antes de que se concediera finalmente una solicitud de desestimación del caso por parte del Estado, el 5 de marzo de 2003.

La AEC había surgido de una larga y amarga historia de lucha por el acceso a la tierra y a la vivienda en Ciudad del Cabo, que había continuado durante el período de transición. El 24 de junio de 1992, las secciones Solomon Mahlangu y Makhaza del ANC en Khayelitsha, Ciudad del Cabo, organizaron una marcha para protestar contra el aumento de los alquileres, acompañada por una huelga de alquileres. El 22 de julio, uno de los líderes de la marcha, Nelson Sithole, fue asesinado en su casa por hombres enmascarados que le preguntaban: ¿Por qué le dices a la gente que no pague el alquiler? Se asumió que los asesinos eran oficiales de policía.

Cuando se creó la Campaña contra los Desalojos (AEC), en noviembre de 2000, ya había un conflicto sostenido entre lxs residentes y el gobierno local. Con cientos de personas, la mayoría mujeres, que participaban en asambleas abiertas organizadas dos veces por semana, la AEC se convirtió en una genuina fuerza popular, primero en Mandela Park en Khayelitsha y luego en otros lugares. El 26 de junio de 2001, cientos de miembros de la AEC fueron a la oficina del ministro provincial de Vivienda en el centro de Ciudad del Cabo para solicitar una reunión. Les arrojaron gas lacrimógeno y 44 personas fueron detenidas, entre ellas niñxs y ancianxs. De la misma manera que con el arresto masivo de los partidarios del AFP, la conclusión era clara: el ANC trataría a la autoorganización de la clase trabajadora negra por fuera del partido de gobierno como un

asunto criminal en lugar de como una oportunidad para profundizar la democracia y construir poder popular.

La AEC enfrentó una represión implacable, incluyendo vigilancia policial violenta, más de 400 arrestos, detenciones sin juicio y la afirmación estándar –inevitablemente racializada– de que “agitadores externos” eran la verdadera fuerza por detrás del movimiento. A pesar de la represión, en junio de 2002 la AEC logró evitar en gran medida los desalojos en las zonas donde era fuerte.



**Graffiti político: ¡No hay tierra, no hay vivienda, no hay votos! en Mandela Park, Khayelitsha, Ciudad del Cabo, 2006.**  
Toussaint Losier

## *Cumbres internacionales*

La Conferencia Mundial contra el Racismo se celebró en Durban a finales de agosto y principios de septiembre de 2001. Continuando el ciclo mundial de protestas en grandes cumbres —que había comenzado con la reunión de Organización Mundial de Comercio en Seattle en noviembre de 1999— los nuevos movimientos sociales se unieron a lxs delegadxs de la conferencia de todo el mundo en una gran marcha a las afueras de la cumbre en Durban. En ese punto estaba claro que había diferencias políticas significativas respecto a las ideas sobre prácticas organizacionales, estrategias e ideología entre y a veces dentro de los movimientos. A pesar de estas diferencias, la marcha fue un éxito y se planificó una participación mayor para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, que iba a tener lugar en Johannesburgo a finales de agosto y principios de septiembre de 2002.

En el período previo a esta cumbre, lxs activistas fueron interrogadxs por los servicios de inteligencia, amenazados y arrestados. Una protesta para exigir la liberación de activistas detenidxs se encontró con violencia policial. Al mismo tiempo, crecían las tensiones dentro de y entre los movimientos. El 31 de agosto de 2002, miles de personas marcharon desde Alexandra, un lugar de población negra empobrecida, hasta Standton, un espacio de poder corporativo. El poder simbólico de la marcha fue extraordinario y se proclamó ampliamente como un momento decisivo en la lucha entre el ANC y la nueva izquierda independiente sobre quién tenía la pretensión más creíble

de mantener la tradición revolucionaria en Sudáfrica. En retrospectiva, fue el punto culminante de un ciclo de organización y lucha, no el comienzo de una nueva oleada.

Después de la marcha en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, la AEC se vio especialmente afectada por una nueva ola de represión. Max Ntanyana, un líder de la AEC que había sido encarcelado primero en 2002, mientras era delegado sindical del Sindicato de Trabajadores Municipales Sudafricanos (SAMWU), fue sometido a repetidas detenciones y condiciones de fianza que le impedían participar en las reuniones de la AEC. Entonces Ntanyana comenzó a operar en la clandestinidad. En febrero de 2003 fue encontrado secuestrado y torturado por la policía. El movimiento llegó a la conclusión de que había sido infiltrado por agentes estatales encubiertos. Un enfrentamiento con una persona que admitió ser un agente de policía encubierto dio lugar a más arrestos y a una sentencia de cárcel para Zandile Mbarane, un miembro de AEC.

En una entrevista con el intelectual Mandisi Majavu, el entonces comandante de la estación de policía en Khayelitsha, capitán Rasimati Shivuri, explicó que: “Con la Campaña contra los Desalojos estaban violando [leyes] de propiedad y eso fue la invitación para que la policía vaya y se infiltre. Obviamente, vamos a entrar. Por eso sabíamos todos y cada uno de sus movimientos”.

## *La rebelión de lxs pobres*

El panorama político comenzó a cambiar en 2004. Surgió una nueva y dramática ola de protestas populares, que comenzó en los asentamientos de barracas en Johannesburgo y se esparció pronto por gran parte del país. Frecuentemente tomó la forma de bloqueos de carreteras y se dirigía a representantes locales del partido de gobierno. Esta ola llegó a denominarse “la rebelión de los pobres”. No era inusual que miles de personas participaran en estas protestas. Al menos tres personas desarmadas fueron asesinadas por la policía en 2004, a medida que las protestas populares se intensificaban en todo el país, comenzando una escalada constante de detenciones y violencia policial mortífera hacia lxs manifestantes que continuaría en los años venideros.

Era común escuchar a protagonistas de este nuevo ciclo de lucha — que se organizaban al margen del partido de gobierno, de las ONG y de los movimientos sociales existentes— declarar que no votarían por el ANC, como señal de protesta. Las elecciones generales estaban previstas para el 14 de abril de ese año y el LPM, que había comenzado a alejarse del control de las ONG, asumió la consigna “¡Sin tierra, no hay votos!”, que fue rápidamente respaldada por la AEC. Esta posición, que pretendía retener los votos del ANC sin dárselos a ningún otro partido, tuvo una fuerte resonancia con el sentimiento popular en las nuevas luchas que estaban surgiendo en todo el país. Sin embargo, fue recibida como “antidemocrática” por una serie de actores, entre ellos periodistas, profesionales de ONG y



funcionarixs del Estado, y se encontró con una represión aún mayor. El día de las elecciones, 57 miembros del LPM fueron arrestados en Soweto. Al día siguiente, cuatro activistas, tres de ellos mujeres, fueron torturadx en las celdas de detención de una estación de policía local.

El LPM, ahora operando autónomamente respecto del control de las ONG, continuó en una escala mucho menor, pero con una política más militante. El CCF se había derrumbado, pero tanto el LPM como la AEC lograron en gran medida hacer causa común con la nueva rebelión. Esta rebelión llegó a Durban el sábado 19 de marzo de 2005. Alrededor de 750 residentes del gran y densamente poblado asentamiento de barracas en Kennedy Road pusieron barricadas en una vía principal quemando llantas y colchones y las mantuvieron por cuatro horas. Hubo 14 detenciones. Fue un año de escalada de las protestas y de la represión. El 12 de julio de 2005, la policía atacó y abrió fuego contra lxs participantes en una protesta pacífica dirigida por la TAC en Queenstown, en Cabo Oriental. Hubo numerosas personas heridas, de las cuales diez fueron atendidas por heridas de bala.

En Durban, la ruptura con la autoridad de las estructuras locales del ANC en el asentamiento de Kennnedy Road llevó a la formación de un nuevo movimiento, Abahlali baseMjondolo (residentes de barracas). El movimiento se formó oficialmente el 6 de octubre de 2005, cuando en una reunión de 32 representantes elegidxs de 12 asentamientos se acordó que no votarían en las elecciones locales fijadas para el 1 de marzo del año siguiente, y que se organizarían independientemente del ANC. Desde el principio, este nuevo

movimiento de moradorxs de barracas —algunas de las personas más marginadas y desprestigiadas en la sociedad— se encontró con una enorme paranoia y hostilidad por parte del Estado, del partido de gobierno y de una parte significativa de la “sociedad civil” basada en las ONG. Los habituales tropos coloniales de criminalidad, irracionalidad, ignorancia y agitación externa (blanca) se movilizaron con asombrosa vehemencia.

El gobierno local declaró públicamente que el nuevo movimiento —que no tenía financiamiento externo en ese momento— era un proyecto de un agente de un gobierno extranjero al que no nombró y lo trató como si fuera una organización ilegal. Arrestos, asaltos y amenazas eran algo cotidiano. Los intentos de organizar protestas legales fueron declarados sumariamente ilegales y lxs manifestantes se enfrentaban a una grave violencia policial, incluido el uso de munición real, cuando intentaban marchar violando las prohibiciones ilegales de protesta.

La temperatura política subió en el período previo a las elecciones de gobiernos locales programadas para el 1 de marzo de 2006. Sinethemba Myeni y Mazwi Zulu, ambos ex miembros del Partido Comunista de Sudáfrica (SACP), fueron asesinados en Umlazi, Durban, después de que decidieran apoyar a un candidato independiente en las elecciones.

Abahlali baseMjondolo adoptó la consigna del LMP: “¡Sin tierra, no hay votos!”, en la versión modificada de “¡Sin tierra, sin casas, no hay votos!”. Esto aumentó enormemente las tensiones. Jacob Zuma había sido despedido de su cargo de vicepresidente en junio

de 2005. En diciembre de ese año fue acusado de violación y en 2006 fue llevado a juicio. Él y sus partidarios trataron de organizar apoyo construyendo una forma de movilización explícitamente étnica. Este proyecto adquirió una intensidad política significativa en Durban y volvió aún más vulnerable a Abahlali baseMjondolo, una organización multiétnica, que también tenía miembros de ascendencia india y de comunidades inmigrantes. Se consideró, y con razón, que Abahlali estaba socavando tanto la credibilidad de la pretensión de Zuma de representar a los pobres, como la base étnica sobre la que trataba de organizar el apoyo en Durban.

Hubo repetidos intentos de impedir que Abahlali baseMjondolo se dirigiera a los medios de comunicación. Poco antes de las elecciones, el movimiento fue invitado a participar en un debate televisivo en directo con el alcalde de Durban en el salón municipal. Cuando la delegación llegó a la alcaldía, se les negó la entrada. Cuando insistieron educadamente acerca de su derecho a entrar en el salón municipal, la policía los atacó y les arrojó gas lacrimógeno.

El día después de las elecciones, la policía mató a tiros en Umlazi a Monica Ngcono, de 22 años, mientras pasaba por delante de una protesta organizada por compañeros de Myeni y Zulu, de camino a su trabajo. La policía afirmó que le habían disparado al estómago con una bala de goma, pero la autopsia mostró que le habían disparado por la espalda con munición real.

El 12 de septiembre, S'bu Zikode y Philani Zungu, entonces presidente y vicepresidente de Abahlali baseMjondolo, estaban en camino a participar en una entrevista en directo en la radio, a pesar



Una mujer camina con sus pertenencias pasando por un cartel, mientras cientos de personas de varios países africanos son desalojadas de un campamento improvisado que están ocupando alrededor de la Misión Metodista Central en Ciudad del Cabo, 1 de marzo de 2020.

Rodger Bosch / AFP / Getty Images

de haber sido advertidos por un alto político del ANC que dejaran de hablar con los medios. Fueron detenidos, arrestados y severamente golpeados en la estación de policía. Cuando otros miembros de Abahlali baseMjondolo se juntaron a protestar por los arrestos afuera de la estación de policía, también fueron golpeados. Poco después, la policía bloqueó el asentamiento Kennedy Road y disparó indiscriminadamente con munición real. El residente Nondumiso Mke recibió un disparo en la rodilla.

La AEC era aún una fuerza en Ciudad del Cabo. Luego del desalojo violento de 1.500 familias de un proyecto de vivienda estatal, se organizó una ocupación a lo largo de Symphony Way en Delft, Ciudad del Cabo, del 1 de febrero de 2007 al 19 de octubre de 2008. La ocupación fue objeto de reiterados actos de acoso y violencia policial y, tras meses de valiente resistencia, terminó en derrota. Sería la última gran lucha organizada por la AEC.

En mayo de 2008, a medida que los costos económicos de la crisis financiera global se hicieron sentir en casa, la rabia popular estalló en una dirección profundamente reaccionaria que asoló al país en forma de pogromos xenófobos, a menudo acompañados de una dimensión étnica, dejando 62 personas muertas. En algunos casos, las turbas se aliaron con Zuma. Hubo casos en los que líderes locales del ANC apoyaron o participaron en los ataques. Esta sombría evolución ejerció aún más presión sobre las organizaciones populares que no estaban organizadas sobre una base étnica o nacional, o que simplemente se oponían a la xenofobia. Las élites políticas locales utilizaron una mezcla de sentimientos raciales, étnicos y xenófobos

para presentar a organizaciones como Abahlali baseMjondolo y LPM como ilegítimas.

Para 2009, el número de protestas era diez veces mayor que en 2004. Casi 5.000 personas estaban siendo arrestadas cada año en protestas y la policía estimaba que el tamaño promedio de una protesta era de alrededor de 4.000 personas. Los reportajes de los medios de comunicación indican que al menos dos manifestantes fueron asesinados por la policía ese año. En ambos casos, los reportajes no dieron los nombres de los muertos, en un ejemplo muy decidor del desprecio casual de los medios de comunicación respecto a la población negra empobrecida.

El ascenso de Zuma a la presidencia el 9 de mayo de ese año exacerbó el giro del ANC hacia una política de división étnica en Durban y aumentó aún más la politización de los servicios de inteligencia. Se infiltró a agentes en sindicatos, movimientos populares, medios de comunicación y ONG, y este tipo de organizaciones fueron sometidas a vigilancia.

En Johannesburgo, la APF declinaba. En Durban, Abahlali baseMjondolo estaba creciendo, y hablaba un lenguaje que resonaba con el humanismo insurgente y la demanda de reconocimiento de la dignidad a menudo presente en la continua rebelión de lxs pobres. El movimiento se había vuelto muy eficaz para detener desalojos mediante el uso de acción directa y de los tribunales. El gobierno local respondió aprobando una legislación que, de forma similar a la legislación colonial previa, trataba de socavar los derechos de lxs ocupantes y obligar a los propietarios de tierras a desalojar.

El movimiento logró que la nueva legislación fuera anulada por la Corte Constitucional el 14 de octubre de 2009.

El 26 de septiembre, Abahlali baseMjondolo fue atacada, al modo de la represión típica de finales de los ochenta, por un grupo de hombres armados que se identificaron a sí mismos en términos étnicos y como partidarios del ANC. La turba declaró su intención de matar a los líderes del movimiento y fue de puerta en puerta buscando a personas específicas y destruyendo hogares. Después de algunas horas, el ataque eventualmente se encontró con una respuesta organizada en términos étnicos y se perdieron dos vidas en el conflicto subsiguiente. El ataque se llevó a cabo con el apoyo tácito de la policía y la sanción explícita de políticos de alto rango, uno de los cuales llegó al asentamiento después del ataque para anunciar que el movimiento había sido “disuelto” por el Estado.

Doce miembros del movimiento, todos ellos pertenecientes a una minoría étnica, fueron detenidos acusados de asesinato y enviados a la cárcel, donde sufrieron graves abusos. Luego del ataque inicial, las casas de los líderes del movimiento continuaron siendo atacadas durante meses, lo que obligó al movimiento a operar clandestinamente por un tiempo. Durante este período, el movimiento fue sometido a una campaña de calumnias violentas. Se demostró que el caso contra los doce miembros de Abahlali baseMjondolo arrestados era un burdo montaje y fue desestimado por el tribunal el 12 de julio de 2011.

El 21 de mayo de 2010, el LPM organizó una marcha de unas 3.000 personas en eTwatwa, al extremo este de Johannesburgo, contra un

concejal de distrito local que era supuestamente corrupto y había participado descaradamente en actos de xenofobia y chovinismo étnico. La marcha dio lugar a un conflicto abierto con las élites políticas locales y sus seguidores y a brutales ataques de la policía, incluyendo el uso de munición real. La policía mató a tiros a la activista del LPM Priscilla Sukai. Esta fue la última gran lucha emprendida por el LPM.

En 2010, el ANC, moviéndose en una dirección cada vez más autoritaria bajo Zuma, decidió remilitarizar la policía, que había sido desmilitarizada después del apartheid. Se creó una unidad especializada y altamente militarizada para hacer frente a las protestas. David Bruce ha señalado que desde 2010 el uso de “métodos brutales” por parte de la policía para contener protestas se convirtió en algo habitual en todo el país, incluyendo utilizar munición real, disparar balas de goma a corta distancia y atacar deliberadamente a los líderes. La militarización general de la gobernanza de las personas empobrecidas no se limitó a la policía. Para entonces, la mayoría de los principales municipios utilizaban unidades armadas especializadas para efectuar los desalojos y el uso de balas de goma se había convertido en algo rutinario. Uno estudio muestra que entre febrero y junio de 2011, la policía mató a 11 personas en las protestas.

Al mismo tiempo, los organismos de inteligencia se centralizaron en una sola organización y se les dio un nuevo mandato, más represivo. Jane Duncan observó que “El mandato político de juntar la inteligencia política ha permitido a los gobiernos normalizar el espionaje de agrupaciones políticas nacionales por los motivos más débiles”.





Desalojo de 1.500 residentes, llevado a cabo por las "Hormigas Rojas", una empresa de seguridad privada cuyo nombre proviene de los trajes rojos que utilizan durante estas expulsiones, en Hillbrow, Johannesburgo, 12 de agosto de 2015.

Cornell Tukiri / Anadolu Agency / Getty Images

## *Después de Marikana*

La masacre de Marikana el 16 de agosto de 2013 dio lugar a otro cambio significativo en el panorama político y tuvo un impacto muy fuerte en la política de las bases y de los sindicatos. Surgió nueva militancia, nuevas ocupaciones por todo el país llamadas Marikana, y desde finales de agosto hasta comienzos de diciembre de 2012, lxs trabajadorxs agrícolas se declararon en huelga en las pequeñas ciudades agrícolas de Cabo Occidental. La policía respondió con mucha violencia y tres huelguistas fueron asesinados.

Para 2013, era claro que el control del ANC sobre el movimiento sindical se estaba acabando. El grueso de los mineros en el cinturón de platino abandonó el Sindicato Nacional de Mineros (NUM), aliado con el ANC, en favor del autónomo Asociación Independiente de Trabajadores Mineros y Sindicato de la Construcción (AMCU). El ANC acusó al AMCU de estar guiado por “extranjeros blancos” con la intención de “desestabilizar nuestra economía”. Aunque el Sindicato Nacional de Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), el sindicato más grande y más militante del país, aún estaba afiliado al Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU), central sindical alineada con el ANC, estaba en revuelta abierta y pidió que Zuma fuera destituido como presidente.

Al menos 12 personas fueron asesinadas por la policía en las protestas locales organizadas por las comunidades ese año. Este también

fue el año en que Abahlali baseMjondolo sufrió su primer asesinato. Lxs activistas de base comenzaron a hablar de “la política de sangre”.

Nkululeko Gwala, un líder de Abahlali baseMjondolo en Cato Crest, Durban, fue asesinado el 26 de junio de 2013, horas después de que altos líderes del ANC hicieran amenazas públicas contra él. El 29 de septiembre del año siguiente, Thuli Ndlovu, el presidente de la sección de Abahlali baseMjondolo en KwaNdengezi, Durban, fue asesinado. Unas pocas semanas después, Mobeni Khwela, un militante del SACP, también fue asesinado en KwaNdengezi. Tres años después, dos consejeros del ANC fueron acusados por el asesinato de Ndlovu, un evento poco frecuente en un contexto donde suele haber una sanción oficial implícita para los asesinatos políticos.

El 1 de marzo de 2014, se lanzó el Sindicato Asociación de Trabajadores (WAU) en Rustenburg, una ciudad del cinturón de platino. Después se demostró que era un proyecto de la inteligencia estatal. Desde los primeros días de la TAC, el Estado había tratado de apoyar e involucrarse con las organizaciones alineadas con el partido gobernante, el ANC, a la vez que difamaba y reprimía a las organizaciones independientes. Es poco probable que se trate de un caso aislado de participación de la inteligencia en la creación de organizaciones diseñadas para rivalizar con las organizaciones populares comprometidas con el disenso abierto.

El 7 de mayo de 2014 se celebraron elecciones generales. Un documento filtrado en 2016 muestra que la inteligencia estatal temía una “primavera árabe sudafricana”, y había planeado recurrir al “máximo uso de medios técnicos y humanos encubiertos” para contrarrestar

esta amenaza imaginaria. Durante este tiempo, en el apogeo de la cleptocracia represiva dirigida por Zuma, los asesinatos comenzaron a dirigirse contra activistas en una mayor variedad de organizaciones.

El 6 de agosto de 2014, tres delegados sindicales de NUMSA, Njabulo Ndebele, Sibonelo Ntuli y Ntobeko Maphumulo, fueron asesinados en Isithebe, en las afueras de Durban. El 7 de noviembre de 2014, NUMSA fue expulsado de COSATU como resultado de su resolución de no apoyar al ANC en las elecciones de ese año. Esto, junto con la implacable oposición a Zuma desde Abahlali baseMjondolo, ahora el único movimiento popular de tamaño significativo que queda, debilitó aún más la pretensión de Zuma de representar a los pobres y a la clase trabajadora y abrió la posibilidad de que las luchas comunitarias y sindicales se reconectaran de la manera en que lo habían hecho en la década de 1980.

Después de que NUMSA rompió con el ANC hubo una serie de incidentes documentados en los que la inteligencia estatal intentó reclutar a miembros de NUMSA. Como había sucedido desde hace bastante tiempo con los movimientos sociales independientes, también siguieron y robaron los computadores de figuras claves del sindicato en circunstancias sospechosas. En diciembre de 2014, NUMSA convocó a una conferencia de prensa en respuesta a la difusión de un documento anónimo, que alegaba ser escrito por “miembros de NUMSA preocupados” y que profesaba exponer un “complot secreto de cambio de régimen” por parte de la dirección del sindicato. Como señaló NUMSA, era similar a otros documentos producidos por facciones de los servicios de inteligencia en campañas de desprestigio previas.



Un miembro del Sindicato Nacional de Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA) canta en un mitin por el Día de Lxs Trabajadorxs en el estadio de Tembisa, en la periferia de Johannesburgo, 1 de Mayo de 2016.

John Wessels / AFP / Getty Images

En 2015, la lucha estudiantil llegó a la élite y a las antiguas universidades blancas. Intersectándose con el movimiento *Black Lives Matter* (Las Vidas Negras Importan) en los Estados Unidos, la movilización comenzó a instalar preguntas profundas sobre los planes de estudio y los símbolos coloniales. Esta lucha fue sometida a la misma violencia policial, así como a violencia por parte de empresas de seguridad privadas, que había sido una característica cotidiana de la vida en los campus de la clase trabajadora negra durante años. También hubo una importante penetración del movimiento por parte de agentes estatales encargados de dirigir el movimiento hacia una agenda “patriótica”. Pero esta vez la represión se situó en el centro de la esfera pública burguesa.

Uno de los asesinatos de activistas de más alto perfil en este período fue el de Sikhosiphi Rhadebe, el 22 de marzo de 2016. Rhadebe era el presidente del Comité de Crisis de Amadiba (ACC), que se oponía a la minería en tierras comunitarias de la Costa Salvaje en Cabo Oriental.

En Inchanga, en las afueras de Durban, varias personas fueron asesinadas a medida que las tensiones escalaban entre el SACP, que ahora criticaba a Zuma, y el ANC, en la carrera por las elecciones de gobiernos locales del 3 de agosto de 2016. El desencadenante inmediato de la violencia fue una disputa sobre la designación de un candidato para el cargo de concejal de distrito en las elecciones. Al final, el SACP presentó un candidato independiente que ganó con una sólida mayoría. La violencia continuó después de las elecciones. Las cifras sobre el número de personas asesinadas, la mayoría de ellas miembros y partidarios del SACP, oscila entre 12 y 25.

En mayo de 2018, Abahlali baseMjondolo comenzó a enfrentar otra ola de represión en Durban. El 21 de mayo de 2018, S'fiso Ngcobo, un líder local del movimiento, fue asesinado. El 29 de mayo de 2018, Zikode sobrevivió a un accidente automovilístico. Un mecánico certificó que la causa del accidente fue una manipulación deliberada del vehículo. El 12 de junio de 2018, el entonces alcalde de Durban, Zandile Gumede, repitió públicamente la vieja afirmación de que Abahlali baseMjondolo, que en este momento tenía más de 55.000 miembros activos en Durban, era un frente para una “fuerza exterior” sin nombre. En la misma reunión, la consejera del ANC Nelly Nyanisa declaró que “Nos ocuparemos de ellos” y advirtió, como lo había hecho el ANC desde 2006, que se negarían a colaborar con Abahlali baseMjondolo y que, en cambio, trabajarían con Shack Dwellers’ International, una ONG internacional liberal.

El 28 de junio, un funcionario de inteligencia contactó a Zikode y le advirtió que la inteligencia estatal, ahora dividida en facciones pro y anti Zuma, estaba al tanto de un plan confirmado para atacar contra la vida de Zikode. Esto fue confirmado por otras fuentes confiables. Zikode, rechazando la oferta del Estado de entrar a un programa de protección de testigos en Ciudad del Cabo, pasó a la clandestinidad en Durban por segunda vez. El 8 de octubre, miles de miembros del movimiento marcharon por el centro de Durban para protestar contra la represión política. En ese momento, el movimiento había perdido 18 integrantes como resultado de los asesinatos, la violencia política y los desalojos violentos. La declaración emitida por Abahlali baseMjondolo el día de la marcha decía:

Desde la fundación de nuestro movimiento en 2005, hemos enfrentado olas de represión incluyendo asaltos, arrestos, tortura bajo custodia policial, campañas organizadas de calumnias, la destrucción de nuestras casas, amenazas de muerte, el asesinato de nuestros miembros durante protestas y desalojos, y el asesinato selectivo de nuestros líderes. El precio por la tierra y la dignidad se ha pagado con sangre.

El asesinato de líderes sindicales ha continuado. Bongani Cola, el vicepresidente del Sindicato Democrático de Trabajadores Municipales y Aliados de Sudáfrica (DEMAWUSA), que es independiente del ANC, fue asesinado en la ciudad de Port Elizabeth el 4 de julio de 2019.

La intersección entre empresas mineras multinacionales, autoridad tradicional y élites políticas continúa dando como resultado una violencia sostenida contra lxs activistas comunitarios que se oponen a la minería. El 26 de enero de 2020, Sphamandla Phungula y Mlondolozu Zulu fueron asesinados en Dannhauser, un poblado minero de carbón en la zona rural de KwaZulu-Natal. El 25 de mayo de este mismo año, Philip Mkhwanazi, que era a la vez un activista antiminería y consejero del ANC, fue asesinado en la pequeña ciudad costera de St. Lucia, nuevamente en KwaZulu-Natal. Un mes después, Mzothule Biyela sobrevivió a un intento de asesinato en la zona gobernada por la Autoridad Tribal Mpukunyoni, también en la costa norte de KwaZulu-Natal.

Aunque la represión continúa, no hay duda de que la situación mejoró una vez que Zuma y algunos de sus aliados clave fueron



destituidos de sus cargos. Sin embargo, el Estado sudafricano continúa siendo extraordinaria y sistemáticamente violento contra la población negra empobrecida. No es una exageración describirlo, en palabras de Achille Mbembe, como una formación necropolítica. La policía mata a personas, la gran mayoría de ellas empobrecidas y negras, a una tasa per cápita que es tres veces más alta que la de la policía en los Estados Unidos. Entre abril de 2012 y marzo de 2019, la policía estuvo bajo investigación por más de 2.800 muertes, más de 800 casos de violación y más de 27.000 casos de tortura o golpes.

Para fines de mayo de 2020, la policía había arrestado a más de 230.000 personas y había matado a 11 mientras aplicaba el confinamiento por el coronavirus, que comenzó el 23 de marzo. El ejército mató a una duodécima persona.

El confinamiento, que ha sido particularmente riguroso en Sudáfrica, ha debilitado a las organizaciones populares. Los sindicatos sacan su fuerza de la planta de producción y ejercen sus medios más eficaces de disrupción a través de la huelga. Con los lugares de trabajo cerrados, los recortes de personal aumentando rápidamente, y prohibidos los encuentros públicos, su poder se está debilitando. Lo mismo es verdad para Abahlali baseMjondolo, que ahora se organiza en cinco provincias y tiene más de 75.000 miembros activos. Su fuerza proviene de las ocupaciones de tierra y su medio más eficaz de disrupción es el bloqueo de carreteras. Sus ocupaciones han sido objeto de incesantes ataques armados, en ocasiones incluso por los militares durante el confinamiento, y el bloqueo de carreteras es ahora tan difícil de realizar como una huelga.

Hay, francamente, figuras y corrientes en el partido de gobierno que han adquirido un gusto por las nuevas formas de control estatal que el confinamiento permite, incluyendo el despliegue del ejército en las calles. Estas corrientes autoritarias dentro del ANC tienen un apoyo significativo entre las clases medias y algunas figuras influyentes en los medios de comunicación. En la coyuntura actual, el futuro inmediato de las organizaciones populares independientes fuera y a la izquierda del ANC es incierto.





Mujeres en el asentamiento de barracas Siyanda en Durban, protestan contra los desalojos y "reubicaciones" a un nuevo plan de vivienda, Marzo 2009.  
Kerry Ryan Chance





Instituto Tricontinental de Investigación Social  
*es una institución promovida por los movimientos,  
dedicada a estimular el debate intelectual al servicio de  
las aspiraciones del pueblo.*

[www.eltricontinental.org](http://www.eltricontinental.org)

Instituto Tricontinental de Pesquisa Social  
*é uma instituição internacional, organizado por  
movimentos, com foco em estimular o debate intelectual  
para o serviço das aspirações do povo.*

[www.otricontinental.org](http://www.otricontinental.org)

Tricontinental: Institute for Social Research  
*is an international, movement-driven institution  
focused on stimulating intellectual debate that serves  
people's aspirations.*

[www.thetricontinental.org](http://www.thetricontinental.org)